

PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD

EXCMA. CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SALA IIIª

JUICIO: “SERVICIOS Y AUTOMOTORES TUCUMÁN S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LAS TALITAS s/ INCONSTITUCIONALIDAD” Expte. N° 344/02

JUAN MARTÍN BUFFO, apoderado de la cesionaria **Florencia Tasselli**, a V.E. respetuosamente digo:

I.- PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD

Que habiendo quedado firme la Sentencia N° 203 de fecha 19/04/2021 por la que se tuvo a mi mandante Florencia Taselli, como cesionaria de la totalidad de los derechos y acciones judiciales derivados del 50% del crédito que la firma Servicios y Automotores Tucumán S.A. tiene a cobrar de la Municipalidad de Las Talitas, en virtud de la sentencia N° 209 del 30/04/2007, y **a los fines de poder Iniciar la Ejecución** de dicho crédito, vengo por la presente a **Plantear la Inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia Económica N° 8.228** - y sus prórrogas, incluida la ley N° 9358 actualmente vigente- y de la Ordenanza N° 552/17 (adhesión de la Municipalidad de Las Talitas a la ley provincial N° 8.228), como así también de las normas y ordenanzas ulteriores prorrogando su vigencia y toda norma aplicable en igual sentido.

Fundo el presente planteo en el actuar procesal de la Municipalidad de Las Talitas, la cual, pese al transcurso de un plazo más que razonable y prudencial, no dio cumplimiento con el pago de los créditos adeudados a mi cedente Servicios y Automotores Tucumán S.A., ni aun condenado por Sentencia de V.E., por la cual el cobro de dicho crédito seguramente deberá ser mediante su ejecución forzada, con la necesidad de la traba de embargo sobre sus fondos. Para ello se torna necesario, en forma previa, remover el valladar consistente en la existencia de leyes de emergencia económica que impiden ese tipo de medidas en contra de la deudora.

La Sentencia del 19 de abril de 2021 tiene a esta parte por cesionario del 50% del crédito que tiene por cobrar la parte actora de la Municipalidad de Las Talitas en virtud de la Sentencia N° 209/2007 (fs. 444/450), recaída en autos.

Dicha Sentencia de fs. 444/450 también aprueba la planilla de cálculos efectuada a fs. 862 vta., en representación de la parte actora-cedente, por la suma de \$1.157.821,59 (pesos un millón ciento cincuenta y siete mil ochocientos veintiun, con 59/100) estas cifras calculadas al 23/08/16.

Dado que a la fecha ya han transcurrido **más de 14 (catorce) AÑOS** desde el dictado de la Sentencia Principal y primigenia, del 30 Abril de 2007 que ordena a la demandada la restitución fondos percibidos sin que esto haya ocurrido a pesar del tiempo transcurrido, y teniendo en cuenta que por el actuar procesal de la Municipalidad, no hay expectativas de cumplimiento en lo futuro, es que vengo a solicitar la declaración de Inconstitucionalidad de la Ley 8.228 y sus modificaciones y prórrogas, habida cuenta la vigencia de la Ley N° 9358, la cual en su art. 1° dice:

“Artículo 1°: Modifícase la Ley N° 8228 y sus modificatorias, en la forma que a continuación se indica: - Reemplazar en los Artículos 1° y 2° la expresión: "31 de Diciembre de 2020", por: "31 de Diciembre de 2021".

Y teniendo en consideración que a su vez la Ley N° 9358 es una prórroga la **Ley N° 8228** y que ésta a su vez dice:

“Artículo 1°.- Declárase la *Emergencia Económica del Estado Provincial, Municipalidades y Comunas Rurales* a partir de la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de Diciembre de 2011.

Artículo 2°.- Dispónese la *inembargabilidad* de los fondos del Estado Provincial, Municipalidades y Comunas Rurales durante un plazo de ciento noventa (190) días, a partir de la vigencia de la presente ley.”

Por ello y dado que mediante Ordenanza N° 552/17, la Municipalidad de Las Talitas ha adherido a la Ley N° 8826, es que vengo a plantear la inconstitucionalidad de dicha Ordenanza y de la Ley N° 8228 y sus modificatorias, en especial la Ley 8826 y la Ley 9358, en los artículos citados y de toda otra norma aplicable, dictada y con efecto en igual sentido.

En efecto, la inembargabilidad de los fondos del Estado Municipal lleva ya larga data y es inconstitucional.

Con fecha 05 de octubre de 1.999 se promulgó la Ley Provincial 6.974 que en su Art. 1° declaraba, hasta el 31 de diciembre de 2.003, la inembargabilidad de la totalidad de los recursos del Estado Provincial.

Luego, es la Ley 7.309 quien en su art. 1° prorroga la vigencia de la Ley 6.974 hasta el 31 de diciembre de 2.004.

Con posterioridad el dictado de la ley 7474 dispone la prórroga de la Ley 6987 y sus modificatorias (Emergencia Económica Financiera del Estado Provincial) hasta el 31 de diciembre de 2.005, y establece que durante la vigencia de la ley que se prorroga se declara la inembargabilidad de la totalidad de los recursos del Estado Provincial. De este modo se prorrogaba una vez más la inembargabilidad y esta vez hasta el 31/12/05.

Esa Ley 6987 a su vez es nuevamente prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2.006 por la Ley 7687. En la misma ley se declara también la inembargabilidad de los recursos del Estado Provincial durante la vigencia de la prórroga de la Ley 6987. Esto quiere decir que por este camino se prorroga hasta el 31/12/06 la inembargabilidad de los recursos del estado provincial.

Lo mismo ocurre con el dictado de la Ley 7862 que en su art. 1° prorroga hasta el 31 de diciembre de 2.007 la vigencia de la Ley 6987 y a su vez en el art. 2 declara la inembargabilidad de los recursos del Estado Provincial durante la vigencia de la prórroga de la Ley 6987. De este modo se prorroga la inembargabilidad hasta el 31/12/07.

Ocurre lo mismo con el dictado de la Ley 7975 que en su art. 1° prorroga hasta el 31 de diciembre de 2.009 la vigencia de la Ley 6987 y a su vez, en el art. 2 declara nuevamente la inembargabilidad de los recursos del Estado Provincial durante la vigencia de la prórroga de la Ley 6987. Con esto se logra una inembargabilidad de los recursos del estado hasta el 31/12/09, ya que esta última norma lo alarga en dos años.

Todas estas inembargabilidades son extensivas a la Municipalidad.

Luego llega la Ley N° 8228 que en su art. 2°, dispone la inembargabilidad de los fondos del Estado Provincial, durante un plazo de ciento noventa (190) días, a partir de la vigencia de dicha ley, y hace extensiva dicha inembargabilidad a los fondos Municipales.

Posteriormente, ese plazo de 190 es ampliado en unos 100 días más por el art. 1 de la Ley N° 8318.

Como si ello fuera poco, la Ley N° 8358 en su art. 2° modificase la Ley N° 8228 disponiendo la inembargabilidad de los fondos del Estado Provincial, hasta el 31 de Diciembre de 2011".

Para mayor abundamiento, a posteriori se dicta la Ley N° 8456 que mediante su art. 2° modifica la Ley N° 8228 y su modificatoria Ley N° 8358 disponiendo la inembargabilidad de los fondos del Estado Provincial, hasta el 31 de Diciembre de 2012.

Luego y como si se tratara de una muestra de cansancio legislativo por tantas prórrogas y prórrogas anuales, la Ley N° 8.554 del 21/12/12, prorroga NO por un año más sino por DOS años más la emergencia económica del Estado Provincial hasta el 31 de diciembre de 2.014 y declara hasta esa fecha la inembargabilidad de los fondos del estado Provincial hasta esa fecha.

Así las cosas, luego tenemos el dictado de la Ley 8753 del 29/12/14 que en su Art. 1° Modifica la Ley N° 8228 y sus modificatorias, reemplazando en los Arts. 1° y 2° la expresión "31 de Diciembre de 2.014" por: 31 de diciembre de 2.015".

Con posterioridad encontramos la Ley 8.826 que en su artículo 1°. Amplía la vigencia de la Ley N° 8228 y sus modificatorias en la forma que a continuación se indica: - En los Artículos 1° y 2°, reemplazar la expresión "31 de Diciembre de 2015" por: "31 de Diciembre de 2017".

Dos años después llegamos a la Ley 9068 que en el Artículo 1°, reemplazar de la Ley 8826 la expresión: "31 de Diciembre de 2017", por: "31 de Diciembre de 2019".

Con la Ley 9204, en el Artículo 1°, reemplaza de la Ley 8228 la expresión: "31 de Diciembre de 2019", por: "31 de Diciembre de 2020".

Finalmente, y aún "vigente" se sancionó la Ley 9358; en la que nuevamente en su Art. 1° se vuelve a modificar y reemplazar en la Ley 8228 la expresión: "31 de Diciembre de 2019", por: "31 de Diciembre de 2020".

Si bien este detalle puede haber cansado al lector, consideramos que fue necesario desarrollarlo para poner en perspectiva de V.E. respecto de la real dimensión del incumplimiento Estatal.

Como se dijo, la Ley N° 8228 Art. 2 y su modificatoria por el Art. 2 de la Ley 8826 y por último por el Art. 1 de la Ley 9358, son inconstitucionales por distintas razones, siendo cada una de ellas es autosuficiente:

a) En primer lugar cabe señalar que, como es sabido, a partir de la organización nacional que instrumentara la Constitución de la Nación Argentina del año 1853 - luego reformada sucesivamente desde el año 1860- se estableció que corresponde al Congreso de la Nación: "Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo su respectivas jurisdicciones..." (art. 75, inc. 12 CN).

Esa norma se complementaba con el Art. 108 de la primigenia Constitución (art. 126) que dispone: "Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden ... ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal de Minería, después que el Congreso los haya sancionado ...".

También es sabido que el Código Civil y Comercial fue sancionado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley que se ataca de inconstitucional.

Es decir que, desde entonces (y antes –Con el Cód. Civil- también), las provincias, entre ellas la provincia de Tucumán, se encuentran constitucionalmente (art. 126) **impedidas de legislar sobre las materias que contiene el Código Civil.**

Y este Código Civil y Comercial es el que legisla –para toda la Nación- en materia obligacional, por lo que deben recordarse sus disposiciones para determinar si la normativa cuya inconstitucionalidad se peticiona en esta presentación, ha sido dictada por la Provincia de Tucumán en infracción a los arts. 75, inc. 12 y 126 de la Constitución Nacional).

En primer lugar el art. 146 inc. a) del Código Civil y Comercial es el que caracteriza como personas jurídicas de carácter público a las Provincias.

Ya el art. 41 del Código Civil, vigente al tiempo de la demanda, equipara a las personas jurídicas (entre ellas, las provincias) a los simples particulares, cuando se trata de obligaciones como las del presente trámite. Y especialmente el art. 42 que textualmente dispone: **“Las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles y puede hacerse ejecución de sus bienes”.**

Es decir que las provincias (y más aún la Municipalidad demandada, diría yo) –como personas jurídicas de derecho público- **no tienen privilegio alguno y deben cumplimentar sus obligaciones al igual que los particulares.**

Tales, por lo demás, son los principios que jurisprudencialmente ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antaño.

Así en el caso “Don Modesto González contra la Provincia de Santiago del Estero, por cobro de alquileres. Inconstitucionalidad del artículo 5° de la Constitución local”, dijo la Corte, el 3 de diciembre de 1930: “Que de las constancias de autos y relacionadas fielmente por el Sr. Procurador General, en su precedente dictamen, resulta que la materia del recurso versa sobre la inconstitucionalidad del art. 5° de la Constitución de aquella provincia alegada por el ejecutante, por ser dicha disposición contraria a preceptos y principios establecidos en la Constitución Nacional.- Que en cuanto al fondo del asunto, el recordado dictamen se apoya en los verdaderos fundamentos que ilustran el caso, con arraigo en los artículos 31, 67, inciso 11 y 108 de la Constitución Nacional y la constante jurisprudencia allí citada.- Que consagrada en ésta la unidad de la legislación civil como consecuencia de la unidad política de la República, no cabe admitir que los estados autónomos puedan destruir aquella, al dictar sus instituciones, concediéndose ellos mismos privilegios o exenciones al margen de la legislación general (art. 31 citado).- Que los plazos extraordinarios acordados a las provincias por las legislaciones locales para que puedan hacerse efectivos en sus bienes los créditos reconocidos legalmente, afecta la estructura del Código Civil que no ha creado beneficio alguno al respecto en favor de las personas jurídicas sobre que legisla, estableciendo, por el contrario una perfecta igualdad entre aquéllas y los simples particulares (arts. 41 y 42, Código Civil)”.

Esta doctrina fue repetitivamente reiterada por el Alto Tribunal (Fallos: 171:431; 172:11; 175:305 y 332; 176:230; 183:229) como el mismo lo recuerda en su sentencia del 29 de noviembre de 1940, en autos: “Compañía Luz y Fuerza v. Municipalidad de Córdoba”.- Ver Fallos: 188:383.-

Ya más cerca en el tiempo –el 15 de diciembre de 1998- la Corte reiteró su doctrina expuesta, en “Provincia de Neuquén v. Nación Argentina”, Fallos: 321:3508.

Y el 16 de marzo de 1999, una vez más la confirmó en un caso en que intervenía la Provincia de San Juan, citando otro precedente: “Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente vs. Provincia de San Luis (Poder Ejecutivo)”. Ver Fallos: 322:447.-

Evidentemente la legislación aquí atacada, ha alterado la supremacía constitucional al decir:

La norma atacada en lo pertinente establece:

“Dispónese la inembargabilidad de los fondos del Estado Provincial, Municipalidades y Comunas Rurales”

Pero ello es lo objetable pues las provincias en su carácter de personas jurídicas pueden ser demandadas y **ejecutadas en sus bienes** por las obligaciones que contraigan, de acuerdo al art. 42 del Código Civil, ya citado.

Si con el dictado de la Ley N° 8228, Art. 2 y su modificatoria en el art. 2 de la Ley 8826 y la Ley 9358, Art. 1, se dispone la inembargabilidad de los Fondos Estatales (Provinciales y Municipales), entonces, la provincia de Tucumán está legislando sobre materia que contiene el Código Civil cuando expresamente por el Art. 126 CN está **impedida de hacerlo**. También lo hace la Municipalidad con su Ordenanza adhiriendo a la inembargabilidad ya cuestionada, y la que se ha mencionada como atacada de inconstitucionalidad.

Ello determina entonces que se violente también el art. 75 inc. 12 CN en cuanto establece que corresponde al Congreso de la Nación: **“Dictar los Códigos Civil, Comercial, ...”**, pues si es el mismo Código Civil quien determina que el Estado pueda ser embargado en sus bienes, no puede luego el mismo Estado, mediante una ley provincial, disponer la inembargabilidad de esos bienes.

b) Como se vio más arriba, en los hechos, la inembargabilidad de los fondos del Estado provincial y municipal, por sucesivas normas que declararon la inembargabilidad y/o prorroga de las leyes de emergencia económica viene produciéndose desde el año 1999, o sea desde hace **(22) VEINTIDOS AÑOS**., lo que resulta a todas luces irrazonable e inconstitucional. Simplemente un estratagema para no pagar nunca.

Lo dispuesto por la Ley N° 8228 Art. 2 y su modificatoria la Ley 8826 y la Ley 9358 Art. 1, constituye una prórroga encubierta de aquella Ley 6974.

Como ésta última había sido prorrogada por la ley 7309, vencido el plazo de prórroga de la inembargabilidad de la totalidad de los recursos del Estado Provincial en fecha 31/12/03, recurrieron mediante el dictado de la Ley 7474 art. 1° a la prórroga de la ley 6987 y de paso en el Art. 2° declararon nuevamente la inembargabilidad de la totalidad de los recursos del Estado Provincial, continuando así con la Ley 6974 y así sucesivamente.

Al constituir una prórroga encubierta, no cumplen con los requisitos que debe llenar una ley de emergencia conforme a la doctrina del caso Peralta Luis A. y otro c/ Estado Nacional, estos son: *“1) que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad, que tenga como finalidad proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos, ... 3,) que la moratoria sea razonable acordando un alivio justificado por las circunstancias, 4) que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria.*

Debido a la falta de predisposición y disposición del Estado Municipal de pagar sus deudas, a pesar de contar durante mucho tiempo con las leyes necesarias para hacerlo, no lo ha hecho, por eso desde mi punto de vista el Poder Judicial está facultado por la Constitución Nacional, a intervenir en estas cuestiones a pesar de lo dicho por la Excma. Corte en los autos Petracca, Miguel Eduardo c/ Provincia de Tucumán s/ Escrituración y fijación de Plazo (sent. 244 del 12/04/2000), Leal de Bravo Fabriciana s/ Prescripción Adquisitiva (sentencia 274 del 18/04/2000) y Quiroga Jorge Roberto c/ Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Medida Preparatoria, cobro de alquileres y Daños y Perjuicios (Sent. 627 del 25/08/2003). Las razones son las siguientes:

Es verdad que el Poder Ejecutivo conjuntamente con el Poder Legislativo, son los que están facultados por la Constitución Nacional a disponer de medidas tendientes a solucionar los problemas que aquejan a la sociedad y son los que imponen las políticas a seguir, siempre y cuando dichas medidas se cumplan en tiempo y forma y normalicen la situación de la comunidad.

Pero cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo no han dado cumplimiento en tiempo y forma con las normas excepcionales -Emergencia del Estado y todas las normas complementarias-, el Poder Judicial está llamado a poner orden y meritar sobre su acierto, oportunidad o conveniencia, máxime cuando se vienen dictándose normas de emergencia económica **“desde hace VEINTIUN AÑOS”**, sin que el Estado haya normalizado y/o encauzado la situación.

De estos 21 años, 14 los hemos padecido en autos pues, como ya se dijo, el dictado de la Sentencia de fondo data del año 2007.

Tiempo suficiente para ello tenía y tiene La Municipalidad demandada, sin embargo resulta de público conocimiento que NO EXISTE VOLUNTAD POLITICA DE SATISFACER LAS DEUDAS QUE EL ESTADO MUNICIPAL DE LAS TALITAS TIENE, ya que al amparo de las leyes de emergencia y sus correspondientes prórrogas lo único que hace es dilatar la cuestión sin dar solución definitiva que es lo que corresponde y pide la sociedad y en particular ésta parte: VOLVER A LA: NORMALIDAD Y NO ESTAR EN UN ESTADO DE EMERGENCIA PERMANENTE, porque entonces las ecuaciones se invierten: la emergencia y el no pago de las deudas es lo normal y el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones que le corresponden, es lo excepcional.

Si el Poder Judicial no puede poner freno a esta situación, la comunidad de este país y especialmente de esta provincia se encuentra en un desamparo total sumida en un absolutismo del Estado, propio de la corte de Luis XIV, rey de Francia.

El artículo 1° de la Constitución Nacional que establece la división de poderes es el que le impone al Poder Judicial, salir en defensa de los ciudadanos que acuden a su protección. Si no lo hace también estaría violando la Constitución Nacional.

No es razonable que el Poder Político, recurra ininterrumpidamente a las leyes de emergencia y sus prórrogas como así también a la inembargabilidad de los recursos del Estado desde hace muchísimo tiempo, sin que reestructure en forma definitiva su deuda y en consecuencia cancele la misma ya que cuenta con los medios de lo económicos y normativos para ello. No es razonable que el Estado Municipal no convoque a sus acreedores en busca de una solución consensuada de pago, tampoco es razonable que el Estado no haya formulado una propuesta de pago a sus acreedores, no es razonable que el Estado no cumpla con las sentencias dictadas por los jueces, porque ello rompe el principio de igualdad y división de los poderes del estado ya que con estos hechos se está colocando al Poder Judicial en un pie de inferioridad con respecto a los otros dos poderes del Estado. **Todo esto se ve agravado porque el estado Municipal demandado en autos no prevé ningún mecanismo cierto de pago, ni tampoco dentro el mismo plazos que hagan cierta la obligación de pago que tienen y que se encuentra con sentencia firme desde hace más de CATORCE AÑOS, “... y de pago, ni hablar”. “De mecanismo de pago: ni hablar”. “De plazo de pago: ni hablar”.**

c) El Estado deudor no puede, en casos como el presente, invocando una y otra vez el mismo argumento, prolongarlo indefinidamente, postergando irrazonablemente el cumplimiento de obligaciones que emanan de derechos adquiridos como es el derecho de propiedad de la acreencia de mi representada. Atenta así contra la más elemental seguridad jurídica y termina decidiendo por sí mismo donde y como pagar. En este sentido se pronunció este Alto Tribunal en autos: Bunader Valperga, Rodolfo E. vs. Sup. Gob. De la Provincia de Tucumán s/ C. Ejec.” Sentencia 105 del 05/03/01.

De no ponerse un freno a estos hechos avasallantes del Poder Político como se hizo en el caso “Alfaro”, mi crédito sería incobrable porque se podría prorrogar indefinidamente la inembargabilidad.

Las prórrogas son más que elocuentes y de esta manera está prolongando “sine die” una medida que supuestamente debe ser transitoria.

El problema que plantea la tesis de la temporalidad de la legislación de emergencia o de necesidad transitoria, propio de una crisis coyuntural, surge cuando por la laxitud de los plazos se la trata como de necesidad permanente, característica de una crisis estructural y en tal supuesto, la normativa originariamente legislada, aparece desvirtuada. Es que si “*graves circunstancias de perturbación autorizan al ejercicio del poder de policía del Estado en forma enérgica de lo que admiten períodos de normalidad y sosiego, **la norma de emergencia tiene que ser circunstancial y temporaria***” (Cf.: C.S.J.N., Fallos 136:171; 200:450; 202:456).

Los años que en la Provincia de Tucumán llevan las sucesivas leyes de prórroga (como vimos 22 años) hace que sin dudas no cumpla con ese requisito de “circunstancial y temporaria”, esto es ninguno de los estándares para que, la prórroga actual pueda ser considerada constitucional.

Sobre una cuestión similar ya se expidió la Excma. Corte Suprema de la Provincia en el caso Alfaro Juan Carlos, que declaró a inconstitucionalidad de la Ley de emergencia 6987 y 6974 de inembargabilidad, criterio que entendemos se debe aplicar también a este caso.

En esa oportunidad se dijo:

“En el caso la deuda del Estado Provincial que por esta causa se pretende cobrar, ya sufrió los efectos de una Ley de consolidación anterior –Ley N° 6271- la cual establecía un procedimiento administrativo para el cobro de las deudas consolidadas. El hecho de que se dictara una nueva Ley de consolidación de deudas estatales no habilita a incorporar a la égida de vigencia y efectividad de dicha Ley a la acreencia que reclama el actor y que fuera ya consolidada con anterioridad. Lo dicho por cuanto, en primer lugar, el acreedor que ha cumplido con todo el trámite necesario previsto en una Ley anterior para ser solventado en su crédito, no puede posteriormente —ni aún en aras de la emergencia económica (en el caso, invocada por segunda vez,)- ser obligado a pasar por similares trámites con todo el dispendio temporal que ello implica. La solución contraria implicaría desconocer la noción de consumo jurídico. En efecto, los hechos pasados y cumplidos durante la vigencia de una Ley, no pueden ser alterados por el dictado de una ley posterior. Todos los hechos y consecuencias consumados durante la vigencia de la Ley 6271 quedan firmes y no pueden ser alterados por la nueva ley dictada (arg. Art. 3 del Código Civil). Por de pronto, entonces, no se puede obligar al acreedor a realizar nuevamente los trámites administrativos impuestos por el Estado deudor para el pago de su deuda. Pero tampoco, a poco que avancemos en la argumentación lógica, se puede sostener que su crédito sufra los efectos de la suspensión en el pago por efecto de la inembargabilidad declarada y la consolidación dispuesta por las Leyes 6974 y 6987. El actor posee un derecho adquirido; la sentencia ejecutoriada posee el carácter jurídico de “propiedad” en relación a su beneficiario. De otro lado, no resulta razonable extender nuevamente el plazo de las obligaciones del Estado Provincial. Esta nueva postergación implica, de hecho, la eventualidad de una postergación sine die del mismo ya que, admitida una vez la consolidación de las deudas ya consolidadas en virtud del argumento de la emergencia económica, nada impide que esto se repita una y otra vez hasta el infinito. Si bien la particular situación de emergencia económica ha provocado el desarrollo de los cauces legales y los fundamentos jurídicos para imponer un límite a los derechos individuales, una excepción a las reglas de fondo que regulan las obligaciones, es cierto que el Estado deudor no puede, en casos como el presente, invocando una y otra vez el mismo argumento, prolongarlo indefinidamente, postergando irrazonablemente el cumplimiento de obligaciones que emanan de derechos

adquiridos, atentando así contra la más elemental seguridad jurídica y terminar decidiendo por sí mismo cuando y como pagar. La falta de la condición de temporalidad y razonabilidad no supone otra cosa que la frustración y desconocimiento del derecho mismo que se pretende cobrar con la afectación, lisa y llana, de la garantía constitucional de la propiedad al quedar, esta particular situación de emergencia económica que pretende justificar la consolidación de lo ya consolidado, al margen de los supuestos y condiciones que garantizan y posibilitan que esta penetre en la esfera protectora de su constitucionalidad. En fin, estas normas no comulgan con el respeto a las garantías constitucionales citadas al constituir una verdadera mutación a la sustancia o esencia del derecho en juego, convirtiéndolo en una incierta —y quizá ilusoria— expectativa de cobro, pues si el Estado dicta una Ley, y no la cumple respecto de uno de sus acreedores, y si respecto de otros, no puede, en relación a aquel, obtener amparo en desmedro insostenible de los derechos de este. Se desvanece así para el actor, el horizonte limitativo temporal de la ley; se borran los argumentos justificativos de la razonabilidad de la misma; se rompe con la seguridad jurídica y el derecho en cuestión termina conociendo su frustración y su avasallamiento por parte del Estado Provincial. En definitiva, los poderes estatales para dictar leyes de emergencia “no son ilimitados y han de ser utilizados siempre dentro del marco del Art. 28 de la Constitución Nacional” (‘C’S, diciembre 27—990, “Videla Cuello, Marcelo c. Pcia. de La Rioja”, LL 1991D, 518,). Corresponde concluir en la inconstitucionalidad e las leyes 6974, 6987 y 6995 en su aplicación al caso de autos.” DRES.: DATO (EN DISIDENCIA) - BRITO - GOANE - AREA MAIDANA. “ALFARO JUAN CARLOS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN SI COBRO EJECUTIVO” - SENT. 104-05/03/2001

Si observamos éste procedimiento en el caso de autos acontece cuanto se señala en el fallo citado, dado que a fs. 842 el letrado Raúl Casimiro Buffo, le requirió a la Municipalidad demandada que informara sobre el **“estado del expediente administrativo identificado con el N° 3362/220/L/10 y sobre la fecha en que se hará el pago del crédito reclamado en autos”**. Y de los informes brindados (fs. 843/844 y 856 surge que aun consolidada (por la ley vigente a esa fecha) la deuda no se abonó. Es más, denota ese expediente muy poco y hasta ineficaz movimiento durante **SEIS LARGOS AÑOS para “nada”**. Ni expectativas de pago, ni menos fecha cierta o siquiera algún camino indicado como método cierto, real y eficaz para lograr el pago de lo adeudado en alguna fecha cierta. **NO HAY NADA**. Ni método ni fecha cierta alguna. O sea la más absoluta inconstitucionalidad frente al derecho de propiedad de los intervinientes en autos.

Con la sanción de la Ley N° 8228 Art. 2 y su modificatoria por el art. 2 de la Ley 8826 y por la Ley 9358 en su Art. 1, se está violando el derecho de propiedad consagrado en el Art. 17 de la Constitución Nacional, ya que se impiden hacer efectivo un crédito que tiene mi mandante a su favor, y si a esto le sumamos que el Estado Municipal condenado nunca ofreció de manera alguna satisfacer el crédito y cumplir con la sentencia dictada por V.E. en el año 2007.

Ley N° 8228 Art. 2 y su modificatoria por el art. 2 de la Ley 8826 y por la Ley 9358 en su Art. 1 son inconstitucionales y entiendo así debe declararlo V.E., por violación a la doctrina del caso “Peralta”, a los Arts. 1, 14, 17 y 28 de la Constitución Nacional y al Pacto de San José de Costa Rica.

Este mismo Tribunal ya se ha expedido al respecto en Sentencia Nro. 171 de fecha 13/04/2018:

*“En el examen de la cuestión sometida a pronunciamiento, debe considerarse que **hoy se encuentra vigente la ley N° 9.068** (B.O. 20/12/2.017), que prorrogó hasta el 31/12/2.019 la Emergencia Económica del Estado Provincial, Municipalidades y Comunas Rurales, declarada por ley N° 8.228 (B.O. 22/12/2.009). Atendiendo a los casos que nos ocupan, resultan aplicables en esta oportunidad los conceptos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en el caso “Alfaro, Juan Carlos vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/cobro ejecutivo”, sentencia N° 104 del*

05/03/2.001. En este precedente se analizó la validez constitucional de una nueva ley de emergencia económica declarada al vencer el anterior régimen de emergencia sancionado por el Estado. Justamente, en el sub lite, el dictado de una nueva norma prorrogando la emergencia (que a su vez ya estaba prorrogada) y que se agrega así a sucesivas prórrogas de la misma, da visos de permanencia a la ley que sólo es excepcionalmente admisible por su temporalidad. Como se dijo, al momento de este pronunciamiento se encuentra vigente la ley N° 9.068, que se trata sustancialmente de una prórroga de la ley N° 8.228, por la que **el Estado pretende suspender indefinida y arbitrariamente el cumplimiento de sus obligaciones contraídas. Como consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad planteada,** a fin de preservar el valor seguridad jurídica, y evitar que el Estado sostenga la emergencia económica sine die, dilatando el cumplimiento de sus obligaciones. En razón de todo lo expresado, corresponde acoger favorablemente el planteo efectuado y, en consecuencia, declarar para el caso de autos la inconstitucionalidad de la ley N° 9.068 actualmente vigente. ...” DRES.: GANDUR – LOPEZ PIOSSEK.-

En idéntico sentido se expidió la CSJT en sentencia N° 940/16, y este Tribunal, verbigracia, en sentencias N° 445 del 05/10/2.011 in re “EDET S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/nulidad de acto administrativo”; N° 558 de fecha 23/11/2.011 in re “Turk, Francisco Carlos Eduardo vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/inconstitucionalidad”; N° 97 del 11/03/2.014 in re “Juan, Miguel Jacinto vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/inconstitucionalidad”; N° 279 del 12/05/2.014 in re “Dinar S.A. Cambio y Bolsa Turismo c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad

Es claro que en la actualidad no se tipifican los presupuestos para que la emergencia económica y/o la inembargabilidad de créditos sean constitucionales. Sobre todo no hay emergencia y/o no hay una moratoria razonable luego de 22 años de inembargabilidad al día de hoy, y no hay una duración temporal y limitada del plazo de emergencia de la misma, ni hay establecida siquiera una mecánica para su pago.

Prueba de ello es que no hay información alguna proporcionada a V.E. de la viabilización del pago.

Le recuerdo a V.E. que **en autos ya se emitió fallo declarando la Inconstitucionalidad de la Norma aquí atacada, mediante Sentencia N° 235/2019 de fecha 22 de abril de 2019,** en la que se determinó:

“(…) HACER LUGAR al planteo de inconstitucionalidad efectuado por derecho propio por el letrado Raúl C. Buffo y, en consecuencia, DECLARAR para el presente caso y de acuerdo a lo considerado, la inconstitucionalidad de la Ley N° 8.228 y sus prórrogas, inclusive la Ley N° 9.068 actualmente vigente, y de la Ordenanza N° 552/17, con costas a la Municipalidad de Las Talitas...”

Además, las Leyes y la Ordenanza cuestionada, declaran la inembargabilidad de la totalidad de los recursos del Estado Municipal. Tal declaración ha sido hecha de modo general, sin atender a la causa (obligación) en razón de la cual se pretende disponer un embargo. De allí entonces que, a diferencia de lo que ocurre en materia de ejecución de sentencias judiciales en contra del Estado, en este punto resulta indiferente la circunstancia de que el crédito que en la especie se intenta ejecutar no esté alcanzado por la consolidación de deudas provincial

y municipal, pues le resulta igualmente oponible la inembargabilidad que también consagra la normativa de emergencia.

El no declarar la inconstitucionalidad solicitada equivaldría a transformar en letra muerta la sentencia de ejecución que pueda obtener la cedente de la actora cuando **«Es innegable que la potestad jurisdiccional comprende tanto las facultades necesarias para juzgar como para hacer ejecutar lo juzgado»**.

Por lo expuesto solicito a V.E. se declare, conforme lo peticionado y las facultades que le da el ordenamiento legal a V.E., la inconstitucionalidad de la Ley 8228, su modificatoria, la Ley 8826 y la Ley 9358 y de la Ordenanza de adhesión N° 552/17 de la Municipalidad de Las Talitas y todas aquellas que prorroguen las mismas.

II.- EL EXCESIVO ESTADO DE EMERGENCIA.

La norma cuestionada no constituye un proceder aislado de la demandada, sino que responde a prácticas inveteradas de declararse en emergencia permanentemente, cuando no de suspender las ejecuciones de sentencia o inhibir su patrimonio como prenda común de los acreedores, de modo que como si ya más de dos décadas de impunidad obligacional y de privilegios indebidos y excesivos a favor del Estado no fueran suficientes, la demandada pretende ahora continuar la fiesta a costas de sus impagos acreedores sujetos a toda suerte de medidas arbitrarias que repetidamente desconocen sus derechos de usar y gozar de su propiedad.

Así las cosas, ni vigentes, ni adquiridos, los legítimos derechos de mi representada, como acreedora, de satisfacer su crédito en tiempo propio y útil se diluirían hasta desaparecer frente a un Estado irresponsable que contrae alegremente obligaciones para luego, a la hora de tener que abonarlas, invocar su indigencia o emergencia, con lo cual el derecho de propiedad garantizado por el art. 17 de la CN es, en la Provincia de Tucumán, una fórmula vacía de todo contenido, soslayando así la consideración de que el crédito de un estado **es pertenencia de su pueblo puesto al amparo de la buena fé de los gobiernos** por lo que el repudio de la deuda o los procedimientos para no pagar o pagar menos de lo que en su virtud se debe constituye un agravio al honor de la nación¹.

Como es sabido, desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que ante circunstancias de grave riesgo social que pongan en peligro la continuidad misma de la comunidad política el Estado puede aplicar **remedios extraordinarios** que impliquen una limitación mayor de las garantías constitucionales de los particulares que la que pueden sufrir en tiempos de normalidad, siempre y cuando esos remedios sean verdaderamente extraordinarios y no alteren la esencia misma de los derechos que por naturaleza posee el hombre y que son receptados en nuestra Carta Magna.

En términos propios de nuestra Constitución, se dice que no hay derechos absolutos, sino que se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio (art 14) los que no podrán alterarlos en ningún caso y es conforme a esta directriz que la Corte ha venido sentando las bases de un poder de policía amplio para tiempos de emergencia, estableciendo al mismo tiempo los parámetros y requisitos de su ejercicio a fin de no avasallar los límites impuestos por el art. 28 de la CN²

¹ CSJN, doctrina de Fallos 149,226.

² CSJN, Ercolano c/ Lanteri de Renshaw.

CSJN, Avico c/ De la Pesa. Mediante la ley 11.741 se prorrogaron por tres años las obligaciones hipotecarias y se redujeron los intereses al 6%. La Corte declara constitucional la ley fundándose en el amplio poder de policía consolidándose la doctrina que admite la intervención del Estado en la regulación de la economía con motivo de la Emergencia económica y social.

CSJN, Peralta, Luis c/ EN. En este caso se reafirman los principios sentados en Ercolano afirmándose que “la restricción del ejercicio normal de los derechos patrimoniales tutelados por la constitución, debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por la sentencia

Así, y como criterio general, dijo que cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios, o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, no hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional, sino una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis.

El fundamento de las leyes de emergencia es entonces la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto³, **más ello no autoriza a invertir el orden lógico y natural de las cosas o su recto sentido**, de modo que resulte lícito sostener que **la emergencia es la regla**, y por ende que es lícita **una permanente e indefinida limitación o mutilación de las garantías constitucionales**, o que la normalidad, y consecuente respeto a los derechos constitucionales, es la excepción, por lo que no cabría la impugnación de inconstitucionalidad de normas como las que se cuestionan en el presente. Pero esa excepción en el caso de autos se ve claramente desdibujada.

En suma, la restricción del ejercicio normal de los derechos patrimoniales tutelados por la Constitución, debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio excepcional y no una mutación permanente o temporalmente indefinida en la subsistencia o esencia del derechos adquiridos por sentencia o contrato, y está siempre sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la situación de emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales.

A la luz de lo anteriormente enunciado, cabe preguntarse si al suscrito solamente se le ha **diferido** su derecho de cobro en forma razonable y temporalmente limitada, tal cual lo permite la pacífica doctrina de la Corte Suprema para los casos de emergencia, o, y por el contrario, la inembargabilidad declarada por la norma cuestionada, constituye un verdadero y definitivo desconocimiento de su derecho de propiedad.

En otras palabras, la política provincial y municipal de consolidar una y otra vez sus obligaciones difiriendo su pago a dilatados períodos de tiempo, de suspender acciones judiciales e incluso los trámites administrativos, constituyen remedios verdaderamente excepcionales, o, y por el contrario, remedios ordinarios y repetidos en el tiempo con los cuales se pisotean sin vergüenza los derechos constitucionales de los ciudadanos tucumanos.

Si bien la Corte ha dicho que la emergencia dura mientras duran las causas que la originan, también ha dicho que la misma **es una situación excepcional** que permite remedios excepcionales, de modo que cuando el poder de policía amplio que se permite en estas circunstancias **muta su condición de ser de excepción a ser regla o normalidad**, estamos entonces ante un caso de suspensión de las garantías constitucionales, que solo podría darse en el marco de un estado de sitio.⁴

o contrato, y esta sometida a control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la situación de emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales”

³ CSJN, Peralta, Luis Arsenio.

⁴ La Corte Suprema de la Provincia, habiéndose pronunciado originalmente a favor de la declaración de emergencia del Estado Provincial por remisión a los recaudos fijados In re “Peralta” en los autos “Petracca, Miguel Eduardo vs. Provincia de Tucumán s/ escrituración” cambia su doctrina en “Alfaro, Juan Carlos vs. Superior Gobierno de la Provincia s/cobro ejecutivo” por configurar la prórroga sine die del estado de emergencia que transforma la suspensión de los derechos en una frustración de los mismos:

“El actor posee un derecho adquirido: la sentencia ejecutoriada posee el carácter jurídico de “propiedad” en relación a su beneficiario. De otro lado, no resulta razonable extender nuevamente el plazo de pago de las obligaciones del Estado Provincial. Esta nueva postergación implica, de hecho, la eventualidad de una postergación sine die del mismo ya que, admitida una vez la consolidación de las deudas ya consolidadas en virtud del argumento de la emergencia económica, nada impide que esto se repita una y otra vez hasta el infinito. Si bien la particular situación

Se tenga presente.

III.- PETITORIO

Por lo expuesto a V.E. solicito:

1) Tenga presente el Planteo de Inconstitucionalidad formulado en contra de la Ley 8228, su modificatoria, por Ley 8826 y la Ley 9358 (en los artículos citados) y la Ordenanza de adhesión N° 552/17 de la Municipalidad de Las Talitas y sus prórrogas, y toda norma que se haya dictado con similar alcance.

2) Se le otorgue al mismo el trámite de ley.

3) Oportunamente Se Haga Lugar a la Inconstitucionalidad planteada.

Proveer de conformidad
Será **JUSTICIA**

de emergencia económica ha provocado el desarrollo de los cauces legales y los fundamentos jurídicos para imponer un límite a los derechos individuales, una excepción a las reglas de fondo que regulan las obligaciones, es cierto que el Estado deudor no puede, en casos como el presente, invocando una y otra vez el mismo argumento, prolongarlo indefinidamente, postergando irrazonablemente el cumplimiento de obligaciones que emanan de derechos adquiridos, atentando así contra la más elemental seguridad jurídica y terminar decidiendo por sí mismo cuándo y cómo pagar. La falta de la condición de temporalidad y razonabilidad no supone otra cosa que la frustración y desconocimiento del derecho mismo que se pretende cobrar con la afectación, lisa y llana, de la garantía constitucional de la propiedad al quedar, esta particular situación de emergencia económica que pretende justificar la consolidación de lo ya consolidado, al margen de los supuestos y condiciones que garantizan y posibilitan que ésta penetre en la esfera protectora de su constitucionalidad. En fin, estas normas no comulgan con el respeto a las garantías constitucionales citadas al constituir una verdadera mutación a la sustancia o esencia del derecho en juego, convirtiéndolo en una incierta –y quizá ilusoria- expectativa de cobro, pues si el Estado dicta una ley y no la cumple respecto de uno de sus acreedores, y sí respecto de otros, no puede, en relación a aquél, obtener amparo en desmedro insostenible de los derechos de éste. Se desvanece así, para el actor, el horizonte limitativo temporal de la ley; se borran los argumentos justificativos de la razonabilidad de la misma; se rompe con la seguridad jurídica y el derecho en cuestión termina conociendo su frustración y su avasallamiento por parte del Estado Provincial. En definitiva, los poderes estatales para dictar leyes de emergencia "no son ilimitados y han de ser utilizados siempre dentro del marco del art. 28 de la Constitución Nacional" (CS, diciembre 27-990, "Videla Cuello, Marcelo c. Pcia. de La Rioja", LL 1991-D, 518..